

NEW LEFT REVIEW 120

SEGUNDA ÉPOCA

ENERO - FEBRERO 2020

ARTÍCULOS

JUAN CARLOS MONEDERO	Francotiradores en la cocina	7
CARLO GINZBURG	El vínculo de la vergüenza	39
NICHOLAS MULDER	Homo Europus	49
MICHEL HARD & ANTONIO NEGRI	<i>Imperio</i> , veinte años después	71

MOVIMIENTO

ROHANA KUDDUS	Indonesia, sorpresa en septiembre	99
ZION LIGHTS	Rebeldes contra el cambio climático	113

ARTÍCULOS

AARON BENANAV	Automatización, segunda parte	125
---------------	-------------------------------	-----

CRÍTICA

OWEN HEATHERLEY	Una utopía de adobe	159
EMMA FAJGENBAUM	La despedida de Akerman	168
OLIVER EAGLETON	¿Grilletes forjados por la mente?	173

WWW.NEWLEFTREVIEW.ES

© New Left Review Ltd., 2000

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

INSTITUTO
25M
DEMOCRACIA

ts
d traficantes de sueños

[SUSCRÍBETE](#)

FRANCOTIRADORES EN LA COCINA

La teoría del Estado y el ciclo de izquierda en América Latina

LA CUESTIÓN DEL poder estatal es uno de los temas más complejos para la política emancipatoria. Incluso cuando los partidos populares con agendas redistributivas logran mayorías electorales y, en principio, ganan acceso a las palancas de poder del gobierno, se enfrentan a multitud de obstáculos a la hora de cumplir sus promesas de campaña. No toman plena posesión del Estado, como si se tratara de un nuevo hogar: en las habitaciones puede haber bombas-trampa y en las escaleras, barricadas; en la cocina puede haber francotiradores, que no se ven porque se dan por sentado y son tanto más eficaces porque no se ven. Como Lenin le recordaba a Kautsky, incluso cuando han sido expulsados de sus cargos «los explotadores» aún conservan muchas ventajas prácticas: dinero, propiedad, educación superior, conocimiento de los «secretos» del gobierno, normas de organización, estrechas conexiones con los altos cargos, etcétera¹. En las democracias liberales se pueden ejercer enormes presiones sobre los gobiernos radicales, ya sea a escala municipal, estatal o federal. Tanto los principales medios de comunicación, como el poder judicial, los servicios de inteligencia o los partidos de la oposición pueden entrar en escena con escándalos provocados por trivialidades, acoso judicial, trucos sucios o maniobras políticas, incluso antes de entrar a considerar las presiones del mercado. Si no queremos quedar atrapados en un estado permanente de melancolía, necesitamos un análisis minucioso de la enorme capacidad de reacción que tiene el Estado en defensa de los intereses del capital.

¹ V. I. Lenin, «La revolución proletaria y el renegado Kautsky» [1918], *Obras Completas de Lenin*, vol. 28, Moscú, 1974, pp. 104 y ss.

Estas cuestiones son centrales a la hora de hacer una evaluación del ciclo de gobiernos de izquierda en América Latina iniciado con la victoria de Chávez en Venezuela en 1998 y seguido por la llegada al poder de Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. El fin de ciclo podemos decir que coincide con la victoria de Mauricio Macri en Argentina en 2015, seguida de las victorias de Sebastián Piñera en Chile en 2018 y de Jair Bolsonaro en Brasil el año siguiente. Pero en el momento de escribir estas líneas el panorama político sigue estando ferozmente disputado, con nuevas rebeliones contra la ortodoxia neoliberal en Chile y Colombia, la contrarrevolución en Bolivia, los sucesivos intentos de derrocar a Maduro en Venezuela y las nuevas victorias del centroizquierda en México y Argentina.

Una rica literatura ha identificado las raíces de esta experiencia en las crisis del modelo neoliberal que se verificaron a lo ancho y largo del continente latinoamericano a finales de la década de 1990 –presagiando las que golpearían a los países capitalistas avanzados a partir de 2008– y en su coincidencia con el superciclo de las materias primas liderado por China. En uno de los textos más emblemáticos sobre aquel auge, el estratega brasileño Emir Sader situó la respuesta política marcadamente izquierdista de América Latina a esta coyuntura en el contexto de la larga tradición del continente en materia de revueltas populares². Desde entonces, los análisis se han centrado principalmente en cuestiones subjetivas: estudios de movimientos sociales, protestas y sindicatos, tanto a escala continental como nacional. De estos, una de las aportaciones más originales –la del académico chileno René Rojas– se propone explicar los límites de los gobiernos de la «marea rosa» en términos de la debilidad estructural de las clases populares en América Latina después de décadas de programas del FMI, en contraste con las organizaciones obreras militantes de la década de 1960, aplastadas por el peso de las dictaduras militares de la década siguiente³. Sin embargo, hasta ahora ha habido pocos análisis comparativos entre países de la experiencia reciente de los gobiernos de izquierda con el poder estatal.

² Emir Sader, «América Latina, ¿el eslabón más débil?», *NLR* 52, septiembre-octubre de 2008.

³ René Rojas, «The Latin American Left's Shifting Sands», *Catalyst*, vol. 2, núm. 2, verano de 2018. Véanse también los estudios dedicados a países específicos recogidos en Eduardo Silva y Federico Rossi (eds.), *Reshaping the Political Arena in Latin America: From Resisting Neoliberalism to the Second Incorporation*, Pittsburgh (PA), 2018.

El problema del método

¿Qué fundamentos conceptuales precisaría un estudio de este tipo? Las teorizaciones de los órdenes estatales e interestatales han sido un elemento básico del pensamiento político, con frecuencia –en Maquiavelo, Hobbes, Spinoza, Hegel, Weber, Lenin, Gramsci, Mann, Tilly, Fukuyama– para dar respuesta a las crisis, guerras y revoluciones que han marcado el nacimiento y ulterior devenir del Estado moderno. Al articular media docena o más de perspectivas contemporáneas, la obra de Bob Jessop ofrece una caja de herramientas conceptuales que resultan útiles a la hora de abordar la tarea. Escritor inglés perteneciente a la tradición de la nueva izquierda, comprendida en sentido amplio, las primeras contribuciones de Jessop se centraron en las teorías marxiana y poulantziana del Estado; ha enseñado en el departamento de Sociología de la Universidad de Lancaster desde 1990, después de un periodo de quince años impartiendo Teoría del Gobierno en la Universidad de Essex. Su libro más reciente, *The State: Past, Present, Future* resume casi cuarenta años de estudio⁴.

El planteamiento, que Jessop propone, consiste en no establecer una teoría general del «Estado», es decir, una explicación que comprenda sus orígenes, leyes de movimiento y curso de desarrollo, sin referencia a otros tipos de investigación. Argumenta que el polimorfismo de este mecanismo de gobierno (tipificado en los palacios mesopotámicos, las burocracias académicas, los cacicatos complejos, las ciudades-Estado, las primeras monarquías absolutistas modernas, los trasplantes coloniales y poscoloniales, los partidos-Estado o las democracias liberales capitalistas) y sus múltiples y cambiantes contextos sugieren, más bien, la necesidad de un método combinado de estudio de casos históricos comparativos y análisis coyunturales. El objeto, entonces, no es «el Estado», sino «los Estados» modernos, de los cuales los determinantes primarios son, como dijo Weber, el territorio, la población y el aparato de gobierno, a los que Jessop añadiría la «idea de Estado». Pero esto no puede entenderse sin hacer referencia al sistema más amplio de formas políticas en pugna –imperios multinacionales, teocracias militarizadas, baronías feudales, confederaciones tribales, zonas sin ley– dentro de las cuales los Estados modernos lucharon por abrirse camino hasta alcanzar

⁴ Véase Bob Jessop, *The State: Past, Present, Future*, Cambridge, 2016; las obras anteriores incluyen *State Power*, Cambridge, 2008, y *The Future of the Capitalist State*, Cambridge, 2002; ed. cast.: *El Estado: pasado, presente y futuro*, Madrid, 2017.

una posición de predominio; sin considerar las estrategias discursivas y coercitivas a través de las cuales se aseguran el consentimiento de la población; y sin tener en cuenta las sucesivas jerarquías interestatales en las que han cristalizado⁵. Señala Jessop que las estructuras internacionales de riqueza y poder han adquirido una nueva prominencia para los Estados nacionales en la era de la globalización, introduciendo formas de control –empresas y bancos multinacionales, organismos supranacionales– que no han de rendir cuentas a nadie, pero que son capaces de penetrar en las estructuras sociales de dichos Estados. Al mismo tiempo, el poder económico está más que nunca vinculado al poder de los medios de comunicación, dada su capacidad de transmitir y promover valores culturales específicos, y a las tecnologías de vigilancia. No cabe duda de que a día de hoy los Estados son capaces de ejercer un mayor grado de control social del que se podría haber imaginado hace veinte años.

Siguiendo la estela de Nicos Poulantzas en *L'État, le pouvoir, le socialisme* (1978), Jessop argumenta que un Estado no es un instrumento neutro o una herramienta pasiva, que ofrece las mismas restricciones y oportunidades a todos los actores sociales; tampoco debe ser concebido, como en la ciencia política predominante, como algo separado de la sociedad más amplia sobre la que gobierna. Por el contrario, como sugirió el politólogo griego, la constitución formal-institucional de un Estado –su aparato, sus modos de representación, sus ideas de gobierno– refleja una cristalización histórica del equilibrio de las fuerzas sociales en su territorio nacional y más allá del mismo. Para Jessop, que adopta en este punto los términos de Gramsci, esta condensación material representa los intereses del bloque dominante, de los vencedores de las pasadas luchas sociales: del capital sobre el trabajo, de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre los negros y los pueblos indígenas, y del centro sobre la periferia. Pero el pacto estatal también está marcado por los compromisos alcanzados con las fuerzas regionales y de clase de más amplio espectro y por las formas discursivas o «visiones hegemónicas» con las que se gana el consentimiento de los gobernados y proyecta sus propias metas como una cuestión de interés nacional. Es en este sentido como debe entenderse la formulación «ciertamente enigmática» de Poulantzas, según la cual «el Estado es una relación social». Su modo de funcionamiento tiene

⁵ B. Jessop, *The State: Past, Present, Future*, cit., pp. 5, 7 y ss. Este ensayo dejará abierta la posibilidad de un orden de análisis intermedio que combine consideraciones generales sobre una forma específica de Estado con un estudio de casos locales concretos.

sesgos inherentes –Jessop llama a esto «selectividad estratégica»–, que reflejan los intereses del bloque dominante; de esta forma, el Estado liberal-democrático es tanto representativo como jerárquico. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas subyacente está sujeto a cambios como resultado de las transformaciones registradas en la economía, de la evolución social o del impacto de fuerzas externas, lo que puede llevar al Estado a una crisis y poner a sus agentes en la tesitura de responder y adaptarse⁶.

Desde este punto de vista, no es «el Estado» el que actúa; más bien, los poderes de un Estado son activados por conjuntos cambiantes de líderes, funcionarios y políticos ubicados dentro de diferentes instituciones estatales, que a menudo actúan en respuesta a presiones externas, reflejando el equilibrio de fuerzas a escala nacional o internacional. Al mismo tiempo, la matriz institucional del propio aparato estatal –el núcleo del complejo jurídico-político-coercitivo: los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, burocrático, de los servicios de inteligencia, de las fuerzas armadas, etcétera– es una mezcla heterogénea, dentro de la cual la distribución de poderes varía. El peso relativo de los poderes ejecutivo y legislativo, el papel superior que juegan los ministerios poderosos (Economía, Interior), la rendición de cuentas (o la corrupción) de la burocracia, las rivalidades entre los servicios de inteligencia o las fuerzas de seguridad probablemente reflejen las relaciones presentes fuera del Estado, así como perspectivas institucionales estrechas y celos. Para que pueda actuar de manera coherente, el aparato estatal tomado en su conjunto necesita estar unificado por una serie de ideas guía –un proyecto de Estado, en los términos de Jessop– que le proporcionen una orientación general y que perfilen las formas que adoptará su «selectividad estratégica». Este proyecto es más restringido y difiere de las visiones hegemónicas a través de las cuales el bloque dominante pretende unificar, detrás de su dominio, la formación social en sentido amplio para legitimar el poder estatal. Los modos de representación –los sistemas electorales y los partidos políticos, pero también el «aparato ideológico» de los medios de comunicación, los sistemas educativos y las religiones establecidas– son las correas de transmisión fundamentales para la reproducción y la impugnación de su dominio⁷.

⁶ *Ibid.*, pp. 86, 53-56. Por «fuerzas sociales» Jessop entiende no solo las clases en lucha, sino también las agrupaciones regionales, raciales, religiosas o étnicas, con el género como factor transversal a todas ellas.

⁷ *Ibid.*, pp. 66, 68-69, 56, 84-85, 86-89. Uno de los principios propuestos por Samuel Huntington y sus colegas en su informe para la Comisión Trilateral, *Crisis of Democracy* (1975), era la necesidad de reducir el contenido ideológico de los principales partidos políticos.

Esta perspectiva, que Jessop denomina enfoque estratégico-relacional, sugiere una noción dinámica y polifacética de las formas de Estado, cuyas operaciones deben ser comprendidas en el contexto de los cambios económicos y sociales más amplios que tienen lugar en su territorio de referencia, así como, más en general, en el mercado mundial y en los sistemas interestatales de los que forma parte. Ello ofrece una fórmula con la que puede examinarse el poder estatal de una manera más rigurosa y comparativa. En retrospectiva, si volvemos la vista a las teorizaciones estatales producidas en los últimos treinta años, nuestra perspectiva actual debería ser más radical y menos optimista. Este planteamiento puede ser una vacuna tanto contra el optimismo como contra el pesimismo, que nos permita operar sobre la base de un realismo esperanzador. Cuando acceden al gobierno, las fuerzas políticas radicales que proponen un nuevo proyecto para el país entran inevitablemente en conflicto con los intereses creados que operan dentro del aparato estatal. Al carecer de conexiones orgánicas con las estructuras de poder económico, ideológico y político existentes, tendrán dificultades para gobernar si carecen de las herramientas necesarias para contrarrestar la «selectividad estratégica» del Estado. Deben evitar la tentación de utilizar los mismos canales que podría establecer un gobierno conservador –por ejemplo, las redes de corrupción o las fuerzas criminales coercitivas del Estado profundo–, no solo porque esto desacreditaría moralmente su proyecto, sino porque las otras instituciones necesarias que podrían apoyar tácitamente la corrupción y la coerción conservadoras, como los tribunales, el poder legislativo y los medios de comunicación, no estarán disponibles para estas fuerzas políticas radicales.

Para analizar la práctica y los resultados de los gobiernos de izquierda de América Latina en relación con sus Estados tendremos que esbozar en cada caso los procesos históricos de constitución de estos y luego examinar el equilibrio de fuerzas que llevó a las nuevas izquierdas y centroizquierdas al poder, las visiones hegemónicas que propusieron, su historial en la movilización de los proyectos estatales y, por último, las formas de resistencia o sesgos «estratégico-selectivos» establecidos que hubieron de enfrentar durante las cambiantes coyunturas de su tiempo en el gobierno. Huelga decir que en el espacio que ocupa este artículo tal investigación solo puede ser esquemática. Los análisis del poder estatal a menudo corren el riesgo de intentar hacer un recuento total, pero debemos recordar la lección de aquel relato de Borges, *Funes el memorioso*, en la que la memoria prodigiosa del héroe homónimo le impide pensar. Un examen exhaustivo puede producir una clara noche estrellada en la

que es imposible discernir las constelaciones. Lo que sigue, pues, será telegráfico en extremo, y se centrará únicamente en los grandes casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil, dentro de un marco comparativo. Muchas cuestiones relevantes quedarán inevitablemente omitidas. Sin embargo, como da la impresión de que estas preguntas acerca de la experiencia de la «marea rosa» aún no se han formulado, puede ser útil apuntar algunas respuestas provisionales, con la esperanza de que otros las amplíen y corrijan.

Más allá de sus aparentes similitudes y de las olas sincrónicas que han marcado la historia del continente (guerras de independencia a partir de la década de 1810, estabilización oligárquica desde la década de 1870, crisis e insurgencia populista desde la década de 1930, dictadura militar desde la década de 1960, democratización y neoliberalización conjuntas desde la década de 1980, crisis económicas y giros izquierdistas desde la década de 1990), los pactos fundacionales de los Estados latinoamericanos revelan tantos contrastes como elementos comunes. En primer lugar, si empleamos los determinantes iniciales de territorio, población y aparato de gobierno de Jessop, a lo largo de la vasta y variada topografía del continente y de las estructuras sociales diferenciadas de las poblaciones precolombinas, los siglos de dominación imperial española y portuguesa impusieron modelos de gobierno contrapuestos. Si bien este legado dividió las tierras altas andinas hispanas y el cono sur del Brasil lusófono, los patrones de formación del Estado argentino también difieren de los de los Estados andino-caribeños aquí considerados, incluso más de cuanto han variado entre sí los caminos de desarrollo del Estado en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Dicho esto, un examen de los Estados sudamericanos debe comenzar con la matriz del siglo XIX de la que surgieron.

La crisis terminal del imperio latinoamericano de España fue desencadenada por la Revolución Francesa y la conquista de Madrid por Napoleón; los ideales de la Ilustración y las constituciones liberales de Filadelfia y Cádiz proporcionaron modelos para las repúblicas presidenciales que surgirían, pero Bolívar y sus camaradas operaban en un paisaje social diferente. En los altos Andes, el dominio español se había construido sobre la conquista de una compleja civilización urbana que no tenía parangón en Nueva Inglaterra; el principio operativo fue la incorporación a través de la subyugación, con matrimonios mixtos para promover la labor de la Iglesia, en oposición a la exclusión y el genocidio practicados

en Estados Unidos. La coerción militar se utilizó constantemente para someter a las grandes poblaciones nativas y forzarlas a entrar a trabajar en las minas o en las haciendas de la elite criolla, mientras los hijos mestizos podían encontrar una carrera en las milicias privadas de los grandes terratenientes. Estas capas desempeñaron un papel central en las prolongadas guerras de independencia contra las fuerzas realistas españolas residuales, así como en el subsiguiente medio siglo de guerra despiadada que demarcó las fronteras territoriales de los nuevos Estados-nación.

En el momento de su fundación, por lo tanto, los nuevos Estados heredaron las formas políticas de la Ilustración liberal con las estructuras autoritarias del dominio imperial de la España borbónica, excluyendo a las poblaciones indígenas. El modelo constitucional era el de la república presidencial unitaria, que comprendía un ejecutivo fuerte con amplios poderes de veto y decreto; un parlamento débil, que institucionalizaba el gobierno oligárquico mediante el sufragio restringido; un poder judicial más débil aún, que, en lugar de supervisar al Estado, estaba a su servicio, según el modelo romano; privilegios constitucionales para la Iglesia y el Ejército; y un presupuesto militar desproporcionado, financiado mediante impuestos sobre el comercio exterior o mediante extorsiones a las poblaciones indígenas. En la formulación de Jessop, los Estados andinos representaban una cristalización de luchas pasadas –la conquista española, las guerras de liberación– que no ofrecía ningún tipo de concesión o compromiso a las masas indígenas, al tiempo que abría a las crecientes capas mestizas la oportunidad de doble filo que suponía una carrera militar. Con los explotados subyugados por el látigo y el sable, las principales divisiones políticas se daban entre los propios explotadores: caudillos regionales que intentaban apoderarse del palacio presidencial o enconadas luchas entre liberales anticlericales y conservadores intransigentes, que reproducían las fallas ideológicas abiertas por la Revolución Francesa. De acuerdo con Jessop, estas divisiones también señalaban la contradicción existente entre las estructuras de mando unitarias asumidas por el sistema de intendencia de la España borbónica y el localismo impuesto por las haciendas aisladas, los pueblos lejanos y el terreno impenetrable, que convertían los viajes entre Potosí y La Paz, Guayaquil y Quito o Valencia y Caracas en empresas peligrosas. La Iglesia era el único aparato ideológico con ambición de llegar a la totalidad de la población; los pocos intelectuales y periodistas liberales de las ciudades formaban parte de las elites hispanoparlantes.

Las fuerzas del mercado mundial contribuyeron a la consolidación de estos maltrechos Estados oligárquicos en la segunda mitad del siglo XIX. A medida que los grandes terratenientes descubrieron un nuevo papel como exportadores de materias primas con destino a las dinámicas economías industriales capitalistas del hemisferio norte, encontraron los medios (crédito externo) y la motivación (por lo general bajo presidentes liberales: Guzmán Blanco e, inicialmente, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Eloy Alfaro en Ecuador o Ismael Montes en Bolivia) para fortalecer y modernizar la infraestructura nacional (carreteras, puertos, ferrocarriles, teatros, universidades, etcétera). El sistema interestatal al que se incorporaron estaba aún compuesto en gran medida por monarquías imperiales, empezando por la de la hegemónica Gran Bretaña, cuyos préstamos financiaron la inserción de los países latinoamericanos en el mercado mundial como exportadores especializados en productos agrícolas y minerales.

La formación del Estado en Argentina supuso otra configuración del territorio, de la población y del aparato institucional. Sin metales preciosos y escasamente poblada, la región del Río de la Plata y la inmensidad de la Pampa habían sido de importancia secundaria para la corona española, que tardíamente otorgó en 1776 un virreinato a estas zonas meridionales (que abarcaban el actual sur de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina). El yugo imperial era aquí más liviano y los trabajadores rurales –jinetes mestizos sin tierra y campesinos– gozaban de un grado de autonomía mayor que los peones indígenas de los Andes. Buenos Aires ya había desarrollado un papel informal como puerto de contrabando para el tráfico de oro y plata, carne y pieles, así como para el comercio con los holandeses y los británicos; el estatus de virreinato le permitía a la ciudad recaudar impuestos aduaneros, lo que suponía una fuente envidiable de riqueza. Buenos Aires estuvo a la vanguardia de la Guerra de la Independencia y fue escenario de un levantamiento popular contra las autoridades españolas en mayo de 1810; pero había escasa identidad cultural o infraestructura material para conectar este futuro «París de las Américas» con los lejanos pueblos misioneros y estancieros del interior noroccidental, donde los notables criollos importantes miraban más bien hacia el centro imperial del Perú. Los poderosos terratenientes provinciales se negaron a refrendar la Constitución bonaerense de 1819 en pro de una República Argentina unitaria y modernizadora, con un ejecutivo central fuerte y un Congreso elegido en proporción a la población de las provincias; reunieron a sus ejércitos gauchos privados para luchar por la autonomía regional frente a Buenos Aires, dentro de una confederación argentina.

El choque de estos «proyectos hegemónicos», comprendidos en los términos de Jessop, se decidió en guerras civiles entre las elites que durarían cuarenta años, con Gran Bretaña armando a los liberales de Buenos Aires. Pero tanto los federalistas –sobre todo Juan Manuel Rosas, el inmensamente rico terrateniente-dictador que dominó el país entre 1832 y 1852– como los unitarios Bartolomé Mitre (1862-1868) y Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), autor del inmortal *Facundo*, un fulminante retrato socioliterario de un brutal y carismático caudillo de la calaña de Rosas, coincidieron en la construcción de un ejército para llevar a cabo guerras de exterminio contra los habitantes indígenas y librar conflictos fronterizos punitivos con los vecinos de Argentina. Paulatinamente fue tomando forma un acuerdo constitucional oligárquico sobre la base de las enmiendas a la Constitución de 1853, que estipulaban un presidente poderoso, elegido por un colegio electoral provincial, y un Congreso que también se inclinaba hacia el control provincial a través de un Senado elegido por sufragio indirecto. En 1880, con los conservadores instalados en el poder, la ciudad portuaria había sido liberada, como capital federal, del control del poderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, y los impuestos portuarios fluían al Tesoro nacional. Sin embargo, en esta etapa estaba ya alterándose notablemente el equilibrio de las fuerzas sociales y económicas –sobre todo, por la inmigración de millones de trabajadores de los países mediterráneos–, lo que finalmente desafiaría el dominio de la oligarquía argentina.

A diferencia de estas repúblicas hispánicas, Brasil fue creado como una monarquía imperial y su independencia declarada por el príncipe de Braganza, que pronto sería coronado emperador con el nombre de Pedro I. Mientras los vastos virreinos regionales de España se dividían en una docena de Estados más pequeños, las extensas posesiones portuguesas, que aproximadamente abarcaban siete millones y medio de kilómetros cuadrados, mantuvieron una precaria unidad. Allí las relaciones entre territorio, población y aparato estatal eran también *sui generis*. A principios del siglo XIX, los portugueses y los luso-brasileños apenas constituían una sexta parte de los tres millones de habitantes de la colonia, mientras que los tupis nativos habían sido absorbidos en gran medida por medio de matrimonios mixtos forzosos. La mayor parte de la población era de ascendencia africana: los esclavos, de quienes dependían los puertos, las plantaciones y el servicio doméstico –y cuyo número aumentaba en decenas de miles de recién llegados cada año–, además de un estrato sustancial de artesanos y trabajadores negros libres portadores

de su propia cultura afrobrasileña. Para la elite, el haitianismo seguiría siendo un temor siempre presente.

La huida en 1808 de la corte portuguesa a la seguridad de Río mientras el ejército napoleónico cercaba Lisboa trajo consigo los gastados atributos del gobierno absolutista. Pero esto no bastaría para unificar las dispares zonas de exportación agrícola establecidas bajo el sistema portugués de capitanías –las azucareras del nordeste, los pastizales del extremo sur, el oro y los diamantes de Minas Gerais, la preciada madera de la cuenca amazónica–, ni para reconciliar a los poderosos terratenientes y a las elites provinciales (gobernadores, notables, oficiales militares) con la pérdida de control sobre las fuerzas del orden y las redes clientelares en sus regiones de origen. Ello se tradujo en una inestabilidad permanente en el corazón del Estado, según el equilibrio de fuerzas existente entre los centralistas –el palacio imperial, el ejército, los ricos comerciantes de Río y los funcionarios estatales– y los oligarcas federalistas virara en una u otra dirección. La Constitución de 1824, redactada por el palacio, delegó el poder ejecutivo y reglamentario en el emperador, que designaba el Senado y tenía potestad para disolver la Cámara de diputados. Un sistema de colegio electoral de dos niveles para la Cámara permitía un sufragio relativamente amplio en la primera vuelta, que se extendía a los artesanos y a los pequeños comerciantes, aunque los electores así elegidos, que a su vez seleccionaban a los diputados de cada provincia, se restringían a las filas de los notables y los oficiales. Las sucesivas rebeliones provinciales –algunas de las cuales mutaban en levantamientos sociales de masas– fueron sofocadas por la fuerza de las armas.

En la década de 1880, la creciente confianza de sectores ajenos al círculo del emperador (los trabajadores urbanos politizados, cuyas campañas ayudaron a impulsar la abolición de la esclavitud en 1888; el ejército, endurecido por las sucesivas guerras de Pedro II contra Uruguay y Paraguay; y las pujantes regiones cafeteras del centro-sur) generó un apoyo de nuevo cuño al republicanismo. Sin embargo, cuando los federalistas ganaron la batalla después de que Pedro fuera depuesto por los militares en 1889, impusieron un sufragio aún más restringido. Bajo la Constitución de 1891 de los Estados Unidos de Brasil, el gobierno federal estaba controlado por los estados más poderosos, y la presidencia se alternaba entre São Paulo y Minas Gerais. Tal era el orden oligárquico que la Revolución de 1930 derrocó bajo la dirección de Getulio Vargas.

Nuevas fuerzas, nuevas formas

Las conmociones económicas externas –el crac de 1929 y la Gran depresión– darían el golpe de gracia a la mayoría de estas formaciones estatales oligárquicas. La incorporación de sus economías al mercado mundial en tanto que agroexportadores dependientes de Estados Unidos y Europa (café de Brasil, carne y trigo de Argentina, cacao de Ecuador y estaño de Bolivia) suponía que la bajada de los precios de las materias primas, cuando se produjera, las golpearía con dureza. Pero otros cambios externos e internos ya habían socavado sus cimientos. El sistema interestatal había experimentado un cambio de proporciones sísmicas con el surgimiento de una gran potencia anticapitalista después de la Revolución bolchevique; Estados Unidos pronto empezaría a prepararse para liderar la Guerra Fría. En el ámbito interno, nuevas fuerzas sociales habían alcanzado la mayoría de edad con el desarrollo económico (inmigración, inversión extranjera) bajo la supervisión del dominio oligárquico: movimientos obreros incipientes, capas intermedias politizadas, el surgimiento de partidos socialistas, comunistas, anarquistas y radical-nacionalistas, así como corrientes disidentes en las fuerzas armadas.

En diferentes formas y con diferentes ritmos, los regímenes radicales de todo el continente plantearon un nuevo pacto de Estado, que en parte marginaba a las clases terratenientes, consideradas responsables de los problemas del país, y que pretendía atraer a las nuevas clases trabajadoras para iniciar un desarrollo nacional basado en el modelo de sustitución de importaciones: Vargas en Brasil, Perón en Argentina, los «socialistas militares» de Bolivia a finales de la década de 1930 y su revolución, dirigida por el MNR en 1952; y en Ecuador, de manera más irregular, los intentos de los jóvenes oficiales y sus aliados de arrebatar el control fiscal a los plutócratas de Guayaquil en las décadas de 1920 y 1930. Las consecuencias –el recrudecimiento de la lucha de clases, la movilización de los trabajadores agrícolas– no fueron intencionadas. El ejemplo de la Revolución cubana mostraba hacia dónde podían dirigirse. La respuesta de los oligarcas fue implementada por los mandos del ejército, enducidos por el entrenamiento estadounidense. Las dictaduras militares tomaron el poder en Brasil (1964-1985), Argentina (1976-1983), Bolivia (1971-1978) y Ecuador (1972-1979).

En gran medida, las cautelosas transiciones de las dictaduras a la democracia liberal replicarían, si bien con un sufragio más amplio, la forma

constitucional de los Estados oligárquicos, a saber: una república presidencialista, un senado dominado por los intereses conservadores de los terratenientes, y unas fuerzas armadas nunca alejadas del poder. Los contextos externos e internos de las nuevas democracias de América Latina habían cambiado drásticamente. Su inserción en el mercado mundial, con endeudamiento extremo, estaba ahora gobernada por poderosas fuerzas institucionales que vigilaban la aplicación de la política del llamado Consenso de Washington, sobre todo con respecto a la privatización de los bienes del Estado. Dentro del complejo institucional del Estado, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas recibieron un nuevo impulso, lo cual reflejaba un equilibrio de fuerzas entre el mundo exterior y el interior del país, un equilibrio que privilegiaba los intereses de la libre circulación del capital financiero y descartaba los de los trabajadores. Pero el resultado fue que los partidos liberal-demócratas gobernantes sufrieron los desastrosos derrumbes financieros, los programas de austeridad del FMI y los nefastos balances sociales de la década de 1990. Este era, por lo tanto, el contexto general en el que llegaron al poder los nuevos gobiernos de izquierda. Queda por examinar sus estrategias estatales.

Venezuela: bolivarismo armado

El desarrollo precoz de Venezuela como Estado petrolero lo situó en un camino algo diferente al de los demás países andinos. En la década de 1920, las rentas del petróleo de las compañías extranjeras que bombeaban en la región del lago de Maracaibo eclipsaron las exportaciones agrícolas tradicionales y convirtieron a la oligarquía terrateniente en una elite financiero-rentista, con intereses que iban mucho más allá de las fronteras del país. Aunque hubo breves tentativas, para un Estado basado en los petrodólares la sustitución de las importaciones a través de la industrialización nunca fue una estrategia viable. En lugar de ello, Venezuela se integró firmemente en el mercado petrolero de Estados Unidos, mientras sus empresarios se convirtieron en vendedores y franquiciados de las empresas estadounidenses, que importaban automóviles, ropa y productos culturales para una clase media urbana que prosperaba en el empleo del sector público y se emblanquecía con la inmigración de posguerra procedente de Italia y España. Las clases trabajadoras, de piel más oscura, engrosaron las economías informales de la periferia urbana. A partir de 1958, el sistema político estuvo dirigido por dos partidos, el centroizquierdista Acción Democrática y el centroderechista COPEI, que

se confabularon para excluir a la izquierda mientras se alternaban en el palacio presidencial y dominaban el Congreso, repartiendo las rentas petroleras entre sus partidarios, complementadas por préstamos externos cuando estas declinaban. Cuando el precio del petróleo tocó fondo, en las décadas de 1980 y 1990, este sistema neooligárquico entró en una profunda crisis, exacerbada por las exigencias de recortes del gasto público planteadas por el FMI y las revelaciones de corrupción presidencial a gran escala. A finales de la década de 1990, la tasa general de pobreza era del 86 por 100 y la de pobreza extrema del 65 por 100; tanto bajo los gobiernos de AD como bajo los de COPEI, los disturbios y las protestas eran respondidos por las balas de la policía.

Este fue el contexto en el que Hugo Chávez fue llevado al Palacio de Miraflores con el 56 por 100 del voto popular, en una coyuntura en la que las elites se hallaban debilitadas y desacreditadas, pero la masa de la población se encontraba desorganizada. La maquinaria estatal —el Congreso, el poder judicial, las mansiones de los gobernadores estatales, la policía y PDVSA, el conglomerado petrolero semiprivatizado— estaba repleta de partidarios del sistema AD-COPEI, mientras que las fuerzas armadas estaban más fragmentadas, tal y como lo demostraba la carrera del propio coronel Chávez. Aunque el equilibrio internacional de fuerzas estaba, por supuesto, liderado por Estados Unidos, para Venezuela esto fue mitigado en cierta medida por el apoyo cubano y la posibilidad de obtener préstamos de Rusia y China, semiindependientes del sistema de Washington. Tras rechazar la ortodoxia del FMI y prometer una campaña inmediata contra la pobreza, Chávez planteó la visión de una revolución bolivariana que reemplazaría la partidocracia de piel pálida por una política inclusiva que incorporara a la mayoría mestiza. La invocación de Bolívar también indicaba una dimensión internacional, la solidaridad sur-sur como defensa contra el predominio global de Washington y el FMI.

Chávez adoptó un enfoque radical con respecto al aparato político, firmando el decreto para un referéndum sobre la reforma constitucional el mismo día en que asumió el poder, el 2 de febrero de 1999. Redactada por una asamblea electa, la Constitución de Venezuela de 1999 fue la primera en ser ratificada por votación popular. Fortaleció el poder ejecutivo y una nueva rama del poder «ciudadano» a expensas del poder legislativo, que quedó reducido a una asamblea unicameral elegida mediante un sistema mayoritario corregido, con sus poderes de destitución del

presidente transferidos a los votantes a través del mecanismo del referéndum revocatorio; a las organizaciones populares se les asignó un papel en la designación de los jueces del Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en 2001, cuando Chávez y la nueva Asamblea propusieron una serie de leyes sobre la reforma agraria, la seguridad social y la asignación de una parte de los ingresos petroleros a programas sociales, se encontraron con la resistencia obstinada de otros sectores del Estado y sus aliados sociales: las fuerzas armadas, la dirección de la PDVSA, la Federación de Empresarios, los canales de televisión y la antigua elite política, con el apoyo tácito del Departamento de Estado norteamericano y sus organizaciones hermanas. En 2002 los chavistas derrotaron un golpe militar mediante la movilización de masas y sobrevivieron a un paro petrolero y la fuga de capitales.

El nuevo pacto de Estado que surgió de estas luchas fue un curioso híbrido. En intensas negociaciones entre bastidores, Chávez y sus camaradas prejubilaron o sobornaron a mandos militares de la línea dura. El resto del ejército fue incorporado, promovido y ganado para el proyecto bolivariano; los altos mandos adquirieron una participación económica significativa en el régimen: entre otras cosas, el acceso a los mecanismos de control de divisas y de tipos de cambio introducidos originalmente como medidas temporales durante el cierre de PDVSA en 2002-2003. En segundo lugar, a medida que subían los precios del petróleo, y con la ayuda de Cuba, Chávez sorteó al Estado para poner en marcha nuevos proyectos en los barrios más pobres: misiones que ofrecían comedores sociales, atención sanitaria, educación, formación profesional y supermercados a bajo precio, a menudo con asistencia militar. Después de 2006, el gobierno invirtió cuantiosas cantidades de dinero en veinte mil consejos comunitarios, esto es, asambleas vecinales encargadas de dar prioridad a los nuevos trabajos públicos, con resultados desiguales. Estas tentativas se vieron obstaculizadas por la falta de personal cualificado y de experiencia administrativa, algo que empeoró después de 2007, cuando Chávez rompió con los antiguos cuadros de La Causa R, la principal agrupación de izquierda de Venezuela, y viró hacia una política —el «socialismo del siglo XXI»— de nacionalizaciones *ad hoc*, a falta de una estrategia industrial coherente, de un plan de gestión obrera o de un plan de inversiones. Por el contrario, la política exterior resultó ser relativamente fácil de reorientar. Caracas tomó la delantera en materia de integración regional, uniendo a Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y media docena más de Estados insulares del Caribe en la

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Se pusieron en marcha proyectos para una moneda regional, el sucre, un fondo monetario, el Banco del Sur, y un canal de televisión radical latinoamericano, Telesur.

En resumen: Chávez y su equipo lograron superar o soslayar las «selectividades estratégicas» del Estado petrolero venezolano en unas condiciones que habían visto el colapso de la vieja elite política. La resistencia se situaba fuera del Estado, en el movimiento estudiantil y en la oposición respaldada por Estados Unidos. La contradicción del régimen radicaba en la relación de dependencia de Venezuela respecto al mercado mundial, una relación que no supo domeñar. Una vez que los precios del petróleo comenzaron a bajar, el mecanismo de tipos de cambio –ya de por sí un pozo de corrupción– impuso grotescas distorsiones en el flujo de importaciones, creando un mercado negro ilegal y una economía legal con control de precios sacudida por la escasez: una situación cuyo arreglo está más allá del ingenio del desafortunado sucesor de Chávez⁸.

Bolivia: ¿Descolonización?

Menos poblada y mucho más pobre que Venezuela, en Bolivia las divisiones etnogeográficas eran más marcadas y solo habían sido «modernizadas» a medias: un pequeño grupo de familias ricas, de piel clara, de la agroindustria y de la banca en la cúspide radicadas con sus fortunas en las tierras bajas orientales en torno a Santa Cruz de la Sierra, las antiguas ciudades coloniales o el distrito Zona Sur de La Paz; capas intermedias de trabajadores mestizos y una incipiente pequeña burguesía indígena (camioneros, comerciantes, constructores y trabajadores del sector inmobiliario) en las economías informales de las zonas recientemente urbanizadas como El Alto; y en la base, un sustrato de agricultores de subsistencia andinos. A pesar de la convulsión popular de 1952, el Estado que surgió en la década de 1980 de la dictadura de Banzer reprodujo las características oligárquicas del siglo XIX en su forma liberal-democrática. El poderoso Senado dio un peso a las regiones orientales conservadoras que era desproporcionado en relación con sus poblaciones. El Congreso funcionaba como un colegio electoral de facto, con la potestad de elegir al presidente si ninguno de los múltiples candidatos lograba la mayoría absoluta. Las coaliciones entre los

⁸ Para un análisis más detallado véase Julia Buxton, «Venezuela después de Chávez», *NLR* 99, julio-agosto de 2016.

partidos –MNR, ADN y el MIR (en sus orígenes, de izquierda)– colaboraron para seleccionar a los vástagos ricos de la elite agrofinanciera, siendo el de Gonzalo Sánchez de Lozada un caso paradigmático en este sentido. Este estrato cerró las minas de estaño andinas, un centro histórico de militancia obrera, y luego procedió a enriquecerse vendiendo activos estatales: el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, la electricidad, los ferrocarriles o el agua.

El resultado involuntario fue un cambio en el equilibrio de fuerzas sociales, ya que los programas de privatización respaldados por el FMI provocaron las movilizaciones masivas de las guerras del gas y del agua, lideradas por sectores de la mayoría indígena de Bolivia, que, largo tiempo excluida, ahora se unía tras el Movimiento al Socialismo. De esta forma, la victoria presidencial de Evo Morales en 2005 a la cabeza del MAS contó con el respaldo de una organización de masas más fuerte que la que había apoyado a Chávez, sazonada por años de protestas militantes y bloqueos omnipresentes en las noticias televisivas, fogueada por la expulsión de dos presidentes y curtida frente a las balas de Sánchez de Lozada⁹. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, podía contar con diversos grados de apoyo por parte de los gobiernos de izquierda al mando en Caracas, La Habana, Buenos Aires, Brasilia y Quito. Al mismo tiempo, aunque moral y políticamente desacreditada, la casta gobernante boliviana no había sufrido una debacle a la escala de la elite petrolera venezolana. Segura en sus bastiones regionales, todavía controlaba el Senado y cinco de las nueve prefecturas regionales después de 2005, así como los medios de comunicación y el sistema bancario.

La visión estratégica de Morales dimanaba de la Agenda de Octubre de 2003 del movimiento de masas. Partía de la descripción del edificio político de Bolivia como una reliquia de la España colonial, comparable al *apartheid*, lo cual exigía la elección de una Asamblea Constituyente que diseñara de nuevo el Estado. Según las palabras de Morales en 2003: «Queremos refundar el país, la política, la democracia, con nuestras propias manos», para la renacionalización de la riqueza hidrocarbúrica boliviana y para que Sánchez de Lozada sea llevado a juicio por la masacre de manifestantes. Una vez en el cargo, el gobierno de Morales negoció rápidamente contratos más ventajosos con las compañías extranjeras de gas y otorgó un gran aumento salarial al ejército,

⁹ Véase Forrest Hylton y Sinclair Thomson, «El arco iris a cuadros», *NLR* 35, noviembre-diciembre de 2005.

ofreciendo entrenamiento de oficiales a capas indígenas más amplias y programas de educación para los nuevos reclutas. Sus intentos de acabar con la extorsión y la corrupción en la policía nacional dieron lugar a un motín; el gobierno retrocedió, pero la oposición aprovechó la oportunidad para forjar vínculos más estrechos con la policía. La parcialidad del Estado en la burocracia también operó en contra de los recién nombrados ministros de Morales, muchos de ellos de origen indígena y, en buena parte, mujeres. La nueva empresa pública de agua estaba plagada de ineficiencias.

La resistencia más sistemática centró su atención en el sistema político. En una lucha de dos años en torno a la nueva Constitución, la oposición conservadora asedió y boicoteó alternativamente la Asamblea Constituyente elegida, insultó a su presidenta indígena, movilizó a las corrientes secesionistas de las regiones orientales, lanzó una ruidosa campaña —que en realidad era una cortina de humo— para trasladar la capital a Sucre y se sirvió de su control del Senado para imponer una mayoría de dos tercios en la votación de cada artículo de la Constitución. El resultado fue un compromiso. En términos retóricos, la Constitución proclama una república plurinacional basada en los derechos sociales y el respeto a la cultura indígena, con el arco iris a cuadros de la *wiphala* ondeando junto a la bandera nacional. Pero en términos sustanciales, la reforma agraria fue esterilizada para que no se aplicara a las explotaciones existentes. Se mantuvo el desproporcionado Senado, con cuatro senadores por cada uno de los nueve departamentos de Bolivia, independientemente de la población. Aunque a corto plazo el sistema electoral favorecía a Morales, el fuerte componente mayoritario y los escaños en el Congreso complementados de acuerdo con el tamaño del voto presidencial daba lugar a una representación sesgada del voto, que podía igualmente beneficiar a un candidato derechista. Al concentrar los poderes en torno a un presidente carismático, el sistema intensificó la dependencia del MAS de la figura de Morales, rehén de su propio destino, dado que estaba limitado constitucionalmente a dos mandatos.

El pacto estatal resultante era un acomodo temporal. Una vez bloqueada toda reforma agraria significativa, la agroindustria pudo concentrarse en expandir la producción de soja para el insaciable mercado ganadero chino. Mientras, la elite tradicional aguardaba el final de Morales en el cargo, irritada por la presencia pujante de una nueva clase media indígena en los centros urbanos, a medida que el aumento de los ingresos provenientes del gas impulsaba un auge de la construcción. Entretanto,

la alianza militante detrás de MAS se dividió en intereses sectoriales, algunos incorporados a un régimen cada vez más complaciente y otros progresivamente alejados de él a medida que el crecimiento se ralentizaba. Cuando utilizó la maquinaria judicial para anular el plebiscito de 2016 que se oponía a extender la limitación de mandatos para Morales, el gobierno reveló su debilidad. Aunque Morales ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2019 (la investigación de la Organización de Estados Americanos no encontró ningún problema con el resultado oficial, sino únicamente con el «conteo rápido» officioso), el equilibrio político se había inclinado en su contra¹⁰. Para la destitución de Morales, la oposición contaba con un apoyo institucional sustancial dentro del Estado (la policía, las prefecturas, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el alto mando militar) y con protestas masivas fuera de él, rápidamente hegemónicas por la extrema derecha, así como con el apoyo de la OEA y de la Casa Blanca. En resumen: a través de sus sucesivas mayorías electorales, el gobierno de Morales logró una reforma parcial del Estado, canalizó recursos hacia los pobres y transformó la cultura oficial de Bolivia. Pero se encontró con una resistencia institucional significativa, que, maniatado hasta cierto punto por sus propios errores, fue incapaz de sortear o de doblegar.

Ecuador: modernización tecnocrática de izquierda

Para Ecuador, al igual que para Bolivia, el restablecimiento de la democracia formal tras la corrupta dictadura militar de la década de 1970 estuvo acompañado del aumento de los tipos de interés y de la tutela del FMI. A pesar de las feroces luchas internas de la elite política ecuatoriana, desgarrada por rivalidades regionalistas y maquinarias de partido personalistas, cada uno de los sucesivos gobiernos implementó las mismas políticas que el anterior, hasta llegar a la devastadora crisis económica de 1999, tras la cual el gobierno de centroizquierda de Mahuad adoptó el dólar estadounidense como moneda nacional de Ecuador, vinculando el destino del país a los tipos de interés fijados en Washington DC. Al igual que en Bolivia, las protestas contra esta elite egoísta supusieron la entrada en escena de nuevas fuerzas: a mediados de la década de 1990, las organizaciones indígenas de la Amazonia, la sierra central y la

¹⁰ Para más información sobre el informe de la OEA, véase Guillame Long, David Rosnick, Cavan Kharrasian y Kevin Cashman, «What Happened in Bolivia's 2019 Vote Count? The Role of the OAS Electoral Observation Mission», CEPR, Washington DC, noviembre de 2019.

costa del Pacífico forjaron una amplia confederación, la CONAIE. Entre 1996 y 2005, las protestas de masas y la insatisfacción de los votantes provocaron la expulsión de siete presidentes, ninguno de los cuales terminó su mandato, y de ellos cuatro fueron acusados de corrupción. Sin embargo, las fuerzas antineoliberales (grupos indígenas, trabajadores del transporte, estudiantes, soldados, redes vecinales) también estaban fragmentadas. La CONAIE patrocinó un frente electoral, Pachakutik, que obtuvo ocho escaños en las elecciones de 2003 y se incorporó al gobierno de un coronel supuestamente radical, Lucio Gutiérrez, quien, una vez en el poder, cambió de chaqueta y comenzó a aplicar las constricciones del FMI, solo para ser depuesto por un levantamiento popular en 2005, lo que dejó a la dirigencia de Pachakutik dividida y desmoralizada.

Rafael Correa no lograría unir a estas fuerzas —el ala partidaria de Gutiérrez de Pachakutik se le opuso desde el principio—, pero tampoco capituló ante las normas neoliberales. A diferencia de Chávez o Morales, Correa era un intelectual con un doctorado en economía por la Universidad de Illinois. Forastero en la escena política, había escrito artículos para el efímero sucesor de Gutiérrez y sobre esa base fue invitado a convertirse en ministro de Economía, donde dejó su impronta entre la gente al enfrentarse al FMI. Alianza País, la organización que fundó con el economista del trabajo Ricardo Patiño para disputar las elecciones presidenciales de 2006, era una coalición informal no un partido y sus congresistas fueron propensos a cambiar de bando. En comparación con Chávez o Morales, Correa gobernaba como un tecnócrata. Su programa, sin embargo, lo inspiraban los movimientos populares, que abogaban por poner fin a las políticas neoliberales. Una Asamblea Constituyente elegida al efecto redactó una nueva Constitución plurinacional aprobada en 2008, que consagraba los derechos indígenas y la soberanía nacional sobre los recursos naturales, además de rechazar las bases militares extranjeras. El sistema electoral para la nueva Asamblea Nacional unicameral combinaba los distritos de voto mayoritario y la proporcionalidad de las listas abiertas; los enfrentamientos entre el poder legislativo y el ejecutivo se resolverían mediante la cláusula de «muerte cruzada», es decir, mediante elecciones generales.

A diferencia de la pugna constitucional boliviana, las resistencias al gobierno de Correa se agudizaron una vez que la nueva Constitución hubo sido ratificada democráticamente, es decir, cuando de lo que se trataba era de su implementación. Los intentos de reestructurar la

Administración pública se vieron frustrados por luchas burocráticas internas. La renacionalización de las obras hidráulicas fue bloqueada en el Congreso por las demandas indígenas de que fueran las comunidades locales las únicas en supervisarlas. En septiembre de 2010, un intento de limitar las medallas y bonificaciones que se otorgaban automáticamente a la policía –a instancias del Congreso, no del Palacio de Carondelet– fue recibido con un motín por parte de la policía y de la Fuerza Aérea, cuyos miembros ocuparon la Asamblea Nacional y los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, para luego extender el tumulto a las ciudades provinciales. Correa fue retenido brevemente como rehén cuando se disponía a dirigirse a los oficiales rebeldes, siendo luego rescatado por sus partidarios y los militares. A la semana siguiente, el gobierno anunció un aumento de sueldo a la policía.

Más sorprendente fue el éxito de Correa y Patiño en la reorganización del Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se puso al Banco Central bajo control democrático, instruyéndole para que desplegara sus reservas como baluarte contra la crisis financiera de 2008, mientras se instaba a los bancos nacionales a que repatriaran alrededor del 60 por 100 de sus activos. Patiño inició una auditoría de la deuda nacional, abriendo los libros para desvelar los términos de los préstamos que los bancos internacionales habían arrancado a los líderes del país desde 1976, canceló unilateralmente los considerados ilegítimos y negoció una rebaja de dos tercios en el resto. El pago de la deuda había consumido el 40 por 100 del presupuesto nacional de Ecuador, una cantidad que triplicaba la suma gastada en bienestar social; ahora esa proporción se había invertido, y el FMI fue enviado de vuelta a casa. El gasto público se canalizó hacia las carreteras, las escuelas y los hospitales con el fin de hacer realidad el derecho constitucional a la atención médica y la educación gratuitas y universales; entre 2005 y 2015, los niveles de pobreza cayeron desde el 42 al 25 por 100. Una política económica soberana fue acompañada de independencia diplomática, con Patiño al frente como canciller desde 2010. Ecuador fue miembro de primera línea del ALBA y de las demás instituciones de la alianza bolivariana; ofreció refugio en su embajada de Londres a Julian Assange, cuyas revelaciones en Wikileaks incluían informes sobre las relaciones del embajador de Estados Unidos con los medios de comunicación ecuatorianos¹¹.

¹¹ Véase la entrevista con Rafael Correa, «La vía del Ecuador», *NLR* 77, noviembre-diciembre de 2012.

Ecuador no volvió a adoptar una moneda nacional soberana y fue golpeado doblemente por la caída de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar en 2015-2016, golpes que fueron parcialmente mitigados por los préstamos de China. Por entonces, el vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, se postuló para sucederlo. Una vez en el cargo, Moreno no tardó en revertir la situación para volver al *statu quo ante*: retomó las privatizaciones, aplicó recortes a los programas de protección social, así como al sector público, y dio de nuevo la bienvenida al FMI a Quito, que fue recibido con fuertes protestas en septiembre de 2019. En resumen: el gobierno de Correa se enfrentó a una oposición política considerable, tanto de derecha como de izquierda: los magnates de la banca y los medios de comunicación, que fueron a por él desde el principio, y sectores de la CONAIE. Esto se tradujo en parte en resistencia institucional. Sin embargo, Correa fue capaz de movilizar un equipo económico más capaz que el de Chávez; mientras permaneció en el poder, tuvo cierto éxito a la hora de orientar la política estatal en una dirección más igualitaria. Pero una vez más, la dependencia electoral de una figura solitaria, carismática y comprometida hizo que todo ello fuera efímero.

Argentina: peronismo de izquierdas renovado

En Argentina, una sociedad más rica y urbanizada que la de Bolivia o Ecuador sufrió un colapso económico aún más dramático que el de Venezuela. A medida que el desempleo aumentaba y grupos de piqueteros en paro organizaban cortes de carreteras para exigir más apoyo del gobierno, los gobiernos de Menem (1989-1999) y de la Rúa (1999-2001) se limitaron obstinadamente a seguir las recetas del FMI, bloqueando en última instancia las cuentas de ahorro de los votantes para defender la paridad peso-dólar. En el punto álgido de la crisis, familias hambrientas, los cartoneros, oteaban los suburbios de Buenos Aires en busca de cartón para vender. Aquí la movilización popular fue tan enérgica como en Bolivia, aunque en su apogeo las asambleas de barrio de Argentina, las cocinas comunales, los clubes de trueque, las fábricas recuperadas y administradas por los trabajadores y las intervenciones contraculturales probablemente abarcaron una gama social más amplia. Lo más alarmante para la elite argentina era que en el punto de mira de las movilizaciones estaban los líderes políticos en su conjunto: el famoso grito de las multitudes que acosaban la Casa Rosada era *¡Que se vayan todos!*

La crisis del sistema bipartidista puso en tela de juicio la legitimidad del Estado presidencialista surgido de la dictadura militar de 1976-1983. Como máquina electoral, el partido más fuerte era el Partido Justicialista, lanzado por Perón en 1945 con el apoyo de los sindicatos de la CGT como una fuerza nacional-popular, que desviaría los beneficios agrícolas hacia el crecimiento industrial interno, en oposición al liberalismo oligárquico. Pero el PJ había sufrido una conversión oportunista: al asumir el cargo en el punto álgido de la hiperinflación posterior a la dictadura, el líder peronista Carlos Menem había abarrotado el Tribunal Supremo de Justicia de comparsas, y había recurrido a los poderes de emergencia para impulsar una agenda neoliberal que durante un tiempo barrió literalmente con todo lo que tenía por delante, asumiendo el mismo programa del capital internacional contra el que el PJ se había fundado. Revirtiendo los tímidos pasos que se habían dado para llevar a la Junta ante la justicia, Menem liberó a los torturadores de la cárcel. Diez años después, cuando la economía se derrumbó, los votantes repudiaron los restos podridos del peronismo y llevaron al poder a la coalición liberal encabezada por el Partido Radical de De la Rúa, solo para desalojarlo, cuando tampoco él demostró ser mejor, en el levantamiento general de diciembre de 2001.

Correspondió al Congreso, controlado por el PJ, nominar a un presidente interino para supervisar la devaluación del peso. Político de la vieja escuela, Eduardo Duhalde procedía de la provincia de Buenos Aires, donde en muchos distritos la máquina del PJ formaba una virtual amalgama con el Estado, y donde se cambiaban dádivas por votos a escala de bloque o de manzana. Pero los peronistas estaban ferozmente divididos, hasta el punto de que en las elecciones de 2003 había tres candidatos del PJ, incluido el propio Menem. Néstor Kirchner, el poco conocido gobernador de la provincia patagónica de Santa Cruz, tuvo la dudosa ventaja del apoyo de Duhalde; mucho más que Correa –por no hablar de Chávez o Morales–, Kirchner era un hombre del aparato, un gran conocedor del sistema de partidos.

Sin embargo, una vez en la Casa Rosada Kirchner rompió decisivamente con el *statu quo* anterior. Denunció la desastrosa adopción por parte de Menem de un programa que privilegiaba a los grandes conglomerados y a los acreedores internacionales –el «capitalismo buitres»– por encima de las necesidades nacionales. En una serie de anuncios electrizantes, cesó a casi la mitad del alto mando militar, implicado en los crímenes de la guerra

sucia, e instó al Congreso a anular las leyes que los protegían de la justicia. Despidió a cincuenta y dos comisionados de la policía federal y puso en marcha una campaña contra la criminalidad y la corrupción en el cuerpo policial. Kirchner canalizó la repulsa popular contra el Tribunal Supremo de Menem y sus prácticas de compraventa de votos con un llamamiento para su destitución y permitió el escrutinio de los candidatos por parte de los organismos de derechos civiles. Inició la renacionalización de las empresas de agua, correos y ferrocarriles, amplió los subsidios para el transporte público, el combustible y los alimentos, así como los subsidios para los cabezas de familia («jefas o jefes de familia») en paro, atrayendo a los líderes piqueteros a la administración del programa. La política macroeconómica se basaría en el principio de que los pagos de intereses a los acreedores extranjeros no deben poner en peligro el crecimiento interno: «No pagaremos la deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos», le dijo Kirchner al Congreso en marzo de 2004. Rechazó la demanda del FMI de un aumento de las tarifas de los servicios públicos e insistió en objetivos fiscales más bajos, equilibrando así las tasas de crecimiento interno. Con los tenedores de bonos extranjeros, Argentina se aferró firmemente a su oferta de 30 centavos por dólar sobre la deuda pendiente, a la que una mayoría accedió a regañadientes.

La estrategia de Kirchner para superar la resistencia institucional fue acudir a la televisión para explicar los obstáculos que enfrentaba, las presiones de intereses particulares. En el vacío moral y político que dejó el colapso del menemismo, logró encarnar brevemente las esperanzas de las movilizaciones populares en el proyecto de un Estado soberano y responsable, basado –para utilizar los términos gramscianos de Jessop– en un nuevo bloque de clase. La confianza y autoridad de Kirchner se basaba en parte en su experiencia como gobernador de Santa Cruz, una provincia poco poblada con una importante fuerza de trabajo empleada en el sector público, financiada en gran medida por los impuestos locales sobre la extracción de hidrocarburos. Pero también echó mano de los recursos del peronismo de izquierda y, en este sentido, la bancarrota de la clase política argentina no fue tan completa como la de Venezuela. El de Kirchner no era un proyecto pionero, del tipo de los que por entonces estaban intentando implementar Chávez, Morales e incluso, hasta cierto punto, Correa. En lugar de ello, se proponía reconstruir la base industrial nacional y los servicios del sector público, atrayendo a los sindicatos y a los desempleados autoorganizados, en lo que suponía una renovación de la clásica estrategia peronista.

Hecho insólito en una economía capitalista avanzada, los primeros años de la recuperación argentina después de la crisis registraron un fortalecimiento de la clase obrera organizada. El crecimiento estuvo liderado por sectores intensivos en mano de obra, como la metalurgia, los textiles y la construcción; si bien es cierto que la mayoría de los nuevos empleos eran informales, casi un tercio de ellos eran formales. En comparación con Estados Unidos, donde el 1 por 100 más rico monopolizó todos los beneficios de la recuperación, en Argentina el 60 por 100 del nuevo crecimiento se destinó al 30 por 100 más rico y el 40 por 100 al resto. Las tasas de sindicalización cayeron en picado en el periodo de Menem, pasando del 65 al 32 por 100 entre 1990 y 2000; en 2008 aumentaron al 37 por 100, y superaron el 45 por 100 en el sector manufacturero, la construcción y el transporte. El resultado fue un modesto aumento de los salarios y un aumento de los conflictos laborales¹².

Sin embargo, a medida que la recuperación se afianzaba y las movilizaciones populares iban cediendo o se incorporaban a la Administración, las normas de la sociedad capitalista argentina se reafirmaron y los límites del proyecto de Kirchner salieron a la luz. Aunque llevó a cabo una limpieza de las instituciones más comprometidas, Kirchner no intentó ninguna renovación de raíz del tradicional Estado federalista argentino, del cual el PJ dependía en gran medida para su clientelismo. Este sistema otorgaba mucho poder político a los gobernadores provinciales electos, que eran los encargados de elaborar las listas cerradas de los partidos para las elecciones al Congreso organizadas de acuerdo con el modelo de representación proporcional de D'Hondt, que privilegiaba a los grandes bloques partidistas. Al mismo tiempo, el centro federal se encargaba de la financiación provincial, abriendo el camino a la lógica de las contrapartidas. En las elecciones a mitad de mandato de 2005, esto supuso un gran impulso para los aliados de Kirchner, pero su apoyo no se mantuvo cuando la alianza de clases radical generada por la crisis comenzó a desmoronarse y la oposición liberal retomó con impulsos renovados su tradicional denuncia de que el peronismo favorecía a una clase obrera lumpen.

Al suceder a su esposo a finales de 2007, Cristina Fernández de Kirchner agravó la fractura –sin duda por consejo de Néstor–, cuando

¹² Para los datos, véase Maristella Svampa, «El final del kirchnerismo», *NLR* 53, noviembre-diciembre de 2008; Cecilia Senén González, Bárbara Medwid y David Trajtemberg, «La sindicalización en Argentina: un debate teórico y metodológico», publicación del MTESS, Buenos Aires, 2009.

subió los impuestos a las agroexportaciones al 44 por 100. Esto, que se presentó como una medida peronista radical contra «la oligarquía», impulsó una nueva alianza entre los agricultores y los sectores más ricos de la clase media urbana, al tiempo que la izquierda se distanciaba del aparato político de un peronismo resurgente, con unas filas aún repletas de menemistas, así como de la creciente riqueza de la pareja gobernante. Como fuerza radical, el kirchnerismo se había disipado bastante antes de que la muerte prematura de su homónimo en 2010 le asegurara un lugar en el panteón de Argentina. En resumen: en las condiciones de crisis del periodo comprendido entre 1999 y 2003, el gobierno de Kirchner movilizó los recursos reformistas tradicionales de Argentina para refundar el proyecto estatal conforme a líneas antineoliberales, nacional-soberanistas y desarrollistas. Su grado de éxito se puede medir en parte por los desastres que acompañaron al intento de Mauricio Macri de restaurar el *statu quo ante* entre 2015 y 2019, lo que dio como resultado el regreso de los peronistas al poder.

Brasil: una inflexión a favor de los pobres

Aunque ciertamente dura (desempleo urbano en aumento, salarios diezmados, la deuda y los pagos de intereses desbocados, una fuerte devaluación de la moneda, etcétera), la crisis neoliberal de Brasil a finales de la década de 1990 no fue tan dramática como la de Argentina o la de Venezuela. No hubo en Brasil levantamientos populares contra las privatizaciones o la austeridad, como en Bolivia y Ecuador, ni crisis de régimen o colapso del sistema de partidos. El PT se había forjado durante un periodo anterior de militancia industrial y ya gobernaba una serie de ciudades, incluyendo Porto Alegre, donde había introducido el presupuesto participativo; las elecciones de 2002 fueron el cuarto intento de Lula de ganar la presidencia. El equilibrio de fuerzas no era propicio; aunque Lula derrotó al sucesor de Cardoso con una diferencia de 61 a 39 por 100, el PT ganó menos de un quinto de los escaños en el Congreso, que estaba dominado por diputados de las pequeñas poblaciones del interior y por partidos de centroderecha. El Estado que presidía era en muchos aspectos un descendiente directo del de Pedro II, aunque trasplantado a la luz y al aire del Planalto de Oscar Niemeyer. La Constitución de 1988 inclinó el poder hacia el Congreso y los gobernadores de los estados, que contaban con su propia policía militar. Los grandes distritos electorales, representados proporcionalmente, y el sistema de votación de listas abiertas favorecían a los candidatos bien publicitados (y bien

financiados) frente a los partidos. A diferencia de Argentina, después de la dictadura no se tomaron medidas para llevar a los torturadores ante los tribunales; el Tribunal Supremo llegó incluso a dictaminar que la ley de amnistía era el fundamento de la democracia brasileña.

El PT había luchado antaño para transformar el Estado, movilizándose junto con el resto de la oposición a la dictadura en favor de elecciones directas —«*Diretas Já*»—, pero en 2002 ya se había adaptado a las normas políticas de Brasil. Al asumir el cargo, la visión estratégica de Lula fue conciliadora: modificando sus apasionados llamamientos a los oprimidos, adoptó el lema «Paz y amor» y firmó una «Carta a los brasileños» en favor del mercado. Durante dos años, su gobierno se mantuvo fiel al duro programa del FMI legado por Cardoso, mientras el crecimiento se interrumpía y el paro aumentaba. Con la vana esperanza de asegurar para Brasil un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU complaciendo a Bush y Chirac, el gobierno del PT reequipó al ejército y lo envió a Haití para aplastar la resistencia de los barrios de chabolas después de que Estados Unidos hubiera destituido al presidente electo, Jean-Bertrand Aristide. A fin de aprobar la legislación en el Congreso, los seguidores de Lula pagaron a los diputados corruptos del interior 7.000 dólares al mes por sus votos, lo cual estaba en línea con el pragmatismo que caracterizaba al PT. «Gobernar es negociar», según explicaba Lula en *A verdade vencerá* (2018). «Negocias un acuerdo con quienes estén en el Congreso, sean ladrones o no».

En 2005, el escándalo de los pagos mensuales estalló en la prensa, que en su mayor parte era rabiosamente hostil al PT. Pero entonces Lula decidió empezar a hacer campaña y viró a la izquierda. La economía se recuperó, impulsada por las exportaciones de mineral de hierro y soja a China, y el gobierno puso en marcha un programa para elevar el nivel de vida de los pobres —Bolsa Família, crédito familiar, salario mínimo, pensiones de vejez— y ampliar la educación. Alentados por el éxito de Kirchner en Argentina, ahora los discursos de Lula contraponían el enfoque del PT en favor de los pobres a las impopulares privatizaciones de Cardoso, a pesar de que su propio gobierno estaba más centrado en aumentar los ingresos privados que en mejorar los servicios públicos. Lula barrió en las elecciones presidenciales de 2006 con un 61 por 100, y sus índices de valoración rondaban el 80 por 100 cuando le pasó el testigo a Dilma Rousseff en 2010. Sin confrontar abiertamente a Washington, Lula adoptó una línea más independiente en materia de integración regional,

desarrolló unas cálidas relaciones con los demás gobiernos de izquierda y después de la crisis financiera de 2008 se unió a otros líderes de los BRIC para demandar una moneda de reserva global distinta del dólar. Nuevos yacimientos petrolíferos frente a la costa, administrados por el gigante energético público-privado Petrobras, abrieron la perspectiva de una riqueza deslumbrante para los brasileños. Desde una posición de aparente fuerza, el PT finalmente obtuvo una mayoría en el Congreso sellando una coalición con la oposición del PMDB, a cambio de varios ministerios y puestos en esta institución.

Sin embargo, la estrategia de adaptación pacífica y pragmática del PT le dejó sin defensas, cuando sus enemigos políticos, a medida que la economía empeoraba después de 2013, aprovecharon la oportunidad para movilizar a las instituciones del Estado en su contra. El poder judicial, que investigaba la corrupción de Petrobras, se concentró –tal y como desvelarían las revelaciones de *Intercept*– en encarcelar a Lula, a pesar de que el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol señalaron extraoficialmente que carecían de pruebas incriminatorias. Mientras estuvo en el poder, el PT no se había preocupado por organizar su enorme base de votantes entre los pobres (y los 40 millones de personas a las que había ayudado a escapar de la pobreza), y ahora era superado en las calles por manifestaciones de millones de personas capturadas por la extrema derecha. Liderados por el vicepresidente de Dilma, Michel Temer, del PMDB, y con el apoyo de los jefes del ejército, la mayoría del Congreso se volvió en contra del ejecutivo y desalojó a Dilma del poder en abril de 2016, a la espera del juicio de destitución contra ella en el Senado. El Tribunal Supremo anuló el derecho constitucional de Lula al *habeas corpus* y aumentó de nueve a doce años la pena de prisión preventiva que se le había impuesto en apelación, y solo cambió el curso cuando las pruebas contra el *modus operandi* de Moro se volvieron demasiado flagrantes para ser ignoradas¹³.

En resumen: con amarga paradoja, la estrategia conciliadora del PT en relación con el Estado había contribuido en 2019 al peor de los desenlaces políticos en América Latina, con Lula en prisión y el ultraderechista Jair Bolsonaro en el Palacio de la Alvorada. Los antecedentes de Bolsonaro hay que buscarlos en el oscuro reino donde coluden la coerción, la ley y

¹³ Véase Pablo Gentili (ed.), *Golpe en Brasil: genealogía de una farsa*, Buenos Aires, 2017; Carol Power et al. (eds.), *Crónica de una sentencia anunciada*, Buenos Aires, 2018.

el dinero: la policía paramilitar y las milicias subestatales de la provincia de Río de Janeiro, que son las fuerzas que han atacado y asesinado a destacados líderes populares como Marielle Franco.

Resultados y perspectivas

Dentro del ciclo general de la izquierda en América Latina, cada una de estas cinco prácticas estratégicas ha sido distinta. En Venezuela, un intento de golpe militar fue derrotado por la movilización de masas y se revirtieron las relaciones entre el gobierno y el ejército para dar lugar a un bolivarismo armado. En Bolivia, un movimiento anticolonial de masas accede al poder. En Ecuador, tenemos un proyecto de modernización tecnocrática pilotado por la izquierda. En Argentina, el obrerismo peronista se revitalizó. En Brasil, hablamos de una tentativa de pacto con el sistema en favor de los pobres. En términos políticos, sus resultados pueden evaluarse en función de la pura duración –un criterio clásico del Estado– y los efectos socioeconómicos. En lo que respecta al primero de los criterios, el proyecto radical de Chávez ha demostrado, paradójicamente, ser más eficaz y duradero que todos los demás. El último intento de la OEA de comprar al mando militar e instalar al líder opositor no electo Juan Guaidó en Miraflores se esfumó en mayo de 2019. Un alto oficial preguntó: «¿Nos toman por mercenarios?». Sin embargo, los resultados socioeconómicos han sido nefastos. La determinación del régimen de imponer controles cambiarios en condiciones de dependencia del mercado petrolero y de las importaciones –y en contra del consejo de los principales economistas de izquierda– ha resultado desastrosa. Los gobernantes de Venezuela han permitido que este fracaso se convierta en el punto de referencia demonizado –el epítome de una visión contrahegemónica– para las fuerzas del conservadurismo.

En términos de progreso socioeconómico, quizá los mayores avances se han visto en Bolivia y en Argentina; pero en ambos países, la falta de durabilidad –debido al personalismo en La Paz y a una frágil coalición de clases en Argentina– ha puesto en duda esos avances. En el momento de escribir este artículo, la derecha está librando una violenta contrarrevolución en Bolivia, bajo la dirección temporal de Jeanine Añez, cuyos gestos virulentamente racistas y reaccionarios han alarmado incluso a la OEA. En Argentina, el intento de Macri de reimponer el neoliberalismo ha terminado con su eliminación electoral y con el regreso al poder de CFK y su exjefe de gabinete Alberto Fernández.

En términos analíticos, puede ser útil examinar las operaciones de los gobiernos de izquierda a través de las cuatro dimensiones de lo que Michael Mann ha llamado el «poder infraestructural»: ley, coerción, dinero y conocimiento. La ley aquí puede ser tomada como referencia al poder legislativo y al sistema judicial, movilizados contra Dilma en Brasil, pero también al propio proceso constituyente, que puede servir –como en Venezuela en 1999– como un proceso de educación política. La coerción denota a las fuerzas militares y de seguridad y sus alas de inteligencia, a escala nacional; pero el poder imperial de Estados Unidos no ha estado ausente en esta historia –aplacado y promovido por el envío del ejército brasileño a Haití por parte de Lula–, como tampoco las intervenciones desde arriba a través de la OEA y otras instancias en Bolivia y Venezuela. Aquí el dinero se refiere en primer lugar al mercado mundial y a las instituciones financieras internacionales, que siempre penalizan el gasto social y fortalecen así el sesgo favorable a la clase dominante.

El conocimiento en este contexto tiene dos significados distintos, si bien relacionados. El primero tiene que ver con la experiencia administrativa y política, un área en la que son más evidentes los sesgos selectivos de clase de los Estados latinoamericanos, conformados por una historia de doscientos años de jerarquías sociales, que otorgan a unos pocos el acceso a la educación y el prestigio, poderosas redes familiares, la comprensión de los procesos legislativos, el acceso social al alto mando militar y, no menos importante, el capital simbólico de saber hablar, actuar y vestirse como portadores de una subjetividad elitista. Los funcionarios del Estado pueden tener tanto *esprit de corps*, como sus propias agendas personales, partidistas o regionales; pasan fácilmente gracias a las puertas giratorias de los altos cargos ministeriales a los lujosos áticos del sector privado. Los gobiernos radicales de América Latina han tenido serias dificultades para reclutar a un nuevo tipo de servidor público, que comprenda el papel novedoso de un Estado popular-democrático.

El segundo significado que tiene aquí el conocimiento se refiere al «sentido común» de las ideologías generalmente aceptadas; implica el poder de construir una narrativa que hace que los sesgos selectivos de la ley, la coerción y el dinero parezcan legítimos. En sociedades profundamente saturadas por las imágenes y los significados de los medios audiovisuales, estos últimos controlan un enorme poder para fijar la agenda y presentar la información de manera selectiva. Quien controla la cúspide de estos conglomerados mediáticos jerárquicos –propietarios, directores,

directores ejecutivos— controla el mensaje. Aquí la mano invisible no es la del mercado. Una orquesta silenciosa afina sus instrumentos tratando de adivinar qué melodías se necesitan, aunque quizá pensando también en quién podría contratarlos o despedirlos, exigirles un favor pagado, invitarlos a almorzar o a pasar unas vacaciones con favores sexuales incluidos en algún lugar glamuroso junto a la playa. La inventiva democrática requiere, como Gramsci sabía, un sentido común diferente, una nueva educación y formas novedosas de liderazgo e identidad popular. Para ello, los gobiernos radicales necesitan acceder a los nuevos medios de comunicación y al pensamiento crítico autónomo.

Ley, coerción, dinero, conocimiento: el dominio de estas cuatro dimensiones es el requisito previo para el uso efectivo del «poder infraestructural» del Estado. En Venezuela, el chavismo ha logrado hasta ahora mantener el apoyo del ejército e inicialmente dirigió los procesos constituyentes y legislativos, poderes que se perdieron en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2016. Pero el conocimiento experto que el Estado pudo reunir fue cada vez más débil y el chavismo ha fracasado notablemente en la administración de la esfera del dinero. En Bolivia, la oposición de la derecha luchó contra el gobierno del MAS hasta detener el proceso constituyente y mantuvo la lealtad del alto mando entrenado en Fort Benning, si bien requirió la intervención de la OEA para derrocar a Morales. Sin embargo, el MAS sí logró algunos éxitos en los ámbitos del dinero —canalizando la recaudación de los impuestos a los hidrocarburos a los pobres de las zonas urbanas y rurales— y la cultura, que no se olvidarán pronto. En Ecuador, el gobierno de Correa reunió un impresionante caudal de conocimiento experto para auditar la deuda y así controlar el ámbito del dinero; pero dar una respuesta efectiva a los medios de comunicación corporativos o a las fuerzas armadas estuvo fuera de su alcance. En Argentina, Kirchner logró hasta cierto punto limpiar de corrupción el poder judicial e imponer el imperio de la ley a los torturadores militares amnistiados. (La suerte de Julio López, un trabajador que debía testificar contra un conocido jefe de policía de Buenos Aires, jefe de un centro de detención secreto de la Junta, mostró dónde se hallan aún estos límites). Si bien hubo menos avances en el campo del conocimiento —el dominio de los medios de comunicación por parte del conglomerado Clarín sigue siendo inviolable—, Kirchner también se enfrentó al FMI, demostrando cierto control sobre el ámbito del dinero.

En Brasil, que contaba con la clase dominante de mayor tamaño, más antigua y más dispersa del continente, apoyada en hábitos de deferencia arraigados a través de siglos de esclavitud, los gobiernos del PT lucharon por imponer el control en la totalidad de estas cuatro dimensiones. Sin embargo, incluso en Brasil, donde el avance progresista ha sufrido la peor derrota del continente bajo Bolsonaro, los legados del ciclo de izquierda no han desaparecido por completo. Los intentos de reiniciar el programa de neoliberalización han generado rondas de protestas desde Argentina hasta Ecuador. Como argumentó Nicos Poulantzas en *L'État, le pouvoir, le socialisme*, la transición al socialismo «no puede terminar con la toma del poder estatal, sino que debe extenderse a la transformación del aparato del Estado»¹⁴. A esto podemos añadir: con la presencia permanente de la ciudadanía en las calles, para que el salto estratégico de las elites (una vez que ha perdido la punta de la pirámide) de un sector del Estado a otro –del poder judicial a la Iglesia, de la policía al ejército, de los tribunales constitucionales a las cámaras altas del parlamento, de las universidades a los medios de comunicación– para bloquear el cambio democrático pueda preverse y derrotarse de manera decisiva.

¹⁴ «Pero requiere, siempre, tomar el poder del Estado», Nicos Poulantzas, *State, Power, Socialism*, Londres, 2000, p. 166; ed. orig.: *L'État, le pouvoir, le socialisme*, París, 1978; ed. cast.: *Estado, poder y socialismo*, Madrid, 1979.